

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá D.C, Veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Tutela
2023-00081

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **LUIS FERNANDO LEON SOTO** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**.

II. ANTECEDENTES:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta el accionante que, presentó una demanda para solicitar la anulación de afiliación a Colfondos y su traslado a Colpensiones, la cual fue respondida favorablemente en primera instancia por el Juzgado 31 Laboral de Bogotá, mediante sentencia del 24 de julio del 2020, La sentencia de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá mediante fallo del 30 de abril de 2021, el cual ya hizo tránsito a cosa juzgada.

2.1.2.- Sostuvo que, La sentencia de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá mediante fallo del 30 de abril de 2021, el cual ya hizo tránsito a cosa juzgada, el 18 de junio de 2021 presenté un derecho de petición a Colfondos, solicitando el cumplimiento del fallo del 30 de abril de 2021. Este derecho de petición fue presentado en el sistema de Colfondos con radicado 210618-001669, Colfondos dio respuesta el 14 de julio de 2021, mediante radicado 210629-001293, indicando que fueron notificados de las sentencias antes referidas, y que esperaba "contar con el proceso finalizado antes de treinta días hábiles contados a partir de la fecha". Colfondos respondió el derecho de petición con el radicado 211019-000749 el 16 de noviembre de 2021 que estaban "adelantando los trámites operativos y cálculos de acuerdo con los conceptos que la sentencia ordena trasladar a Colpensiones y esperamos en el transcurso del mes de noviembre [de 2021] culminar las gestiones del traslado".

2.1.3.- Indica que mediante la solicitud con radicado con radicado 211202-001379, Colfondos respondió mediante correo del 2 de diciembre de 2021, indicando que se demorarían 15 días hábiles realizando el traslado, dadas las continuas demoras y el desconocimiento de los plazos que el mismo Colfondos determinaba en sus cartas, se comunicó telefónicamente en febrero de 2022 para darle seguimiento a este trámite. Debían darle cumplimiento al momento de haberse proferido sentencia de segunda instancia y aún no había sido resuelto. el 15 de febrero de 2022 le envió un correo electrónico a la Sra. Lina Morales, funcionaria de Colfondos (lmorales@colfondos.com.co), en la cual solicité información sobre mi efectivo traslado a Colpensiones, habida cuenta de las demoras injustificadas por parte de la

entidad en darle cumplimiento a la orden judicial que esto ordenó.

2.1.4.- Asegura que el 22 de febrero de 2022 volví a presentar un derecho de petición solicitando el cumplimiento de la orden judicial de realizar mi traslado a Colpensiones, el cual fue remitido en el sistema de Colfondos con radicado 220222-001472, el 7 de marzo de 2022, Colfondos respondió mi derecho de petición con radicado 220222-001472, indicando que el traslado tardaría aproximadamente 15 días hábiles en realizarse. El 26 de abril de 2022, frente a una nueva solicitud de cumplimiento de la sentencia laboral que presento con radicado 220420-001474, Colfondos respondió que el proceso de cumplimiento iba a tomar aproximadamente 90 días hábiles.

2.1.5.- Manifiesta que el 16 de septiembre de 2022 cumplió sesenta y dos (62) años, por lo que ya acreditó todos los requisitos para la pensión. El reporte de Colpensiones no refleja la realidad de las semanas trabajadas porque dice que solo contaba con 433 semanas, lo que impide acceder a la pensión con los derechos que se desprenden directamente de haber cotizado más semanas. Esto viola de forma injustificada el derecho a acceder a la pensión en las condiciones en que debería ser otorgada de conformidad con la Ley 100 de 1993. El 26 de octubre de 2022 radicó un derecho de petición en Colpensiones para solicitud de la corrección de la historia laboral y que le fuera otorgada la pensión con base a las semanas debidamente corregidas.

2.1.6.- Señala que El 11 de noviembre de 2022, Colpensiones envió respuesta en la cual no dan respuesta alguna a la solicitud de corrección de historia laboral y de la asignación de pensión. Nunca ha estado en el AFP de COLPATRIA y no lo incluyeron los periodos faltantes cotizados realmente. Adjuntó extracto de la respuesta.

2.1.7.- Que, como consecuencia de lo anterior, radicó un segundo derecho de petición en Colpensiones para solicitar nuevamente la corrección de la historia laboral en Colpensiones, esto porque, como se mencionado anteriormente, no refleja en forma alguna la realidad de las semanas cotizadas para acceder a la pensión a la que tiene derecho. El 03 de enero de 2023, Colpensiones envió respuesta en la cual solo corrigen 17,16 semanas de alrededor de 97 semanas faltantes, informando que no es posible tramitar lo solicitado por gestiones pendientes de la AFP Colfondos. De acuerdo con la respuesta dada por Colpensiones, no tomaron en cuenta las demás semanas pendientes de incluir.

2.1.8.- Indica que, de conformidad con el Reporte de Semanas Cotizadas en pensiones del 05 de febrero de 2023, no han corregido los ciclos referidos y están a la espera indefinida, que es a todas luces injusta, ilegal y violatoria de los derechos del accionante, reitera, llevo en este proceso más de un año, por lo que se ha sobrepasado cualquier límite legal para realizarlo. A la fecha del 5 de febrero de 2023 no se han incluido las semanas faltantes, a la fecha, asegura haber cotizado al menos 1703.4 semanas. Relaciono a continuación mi historial laboral consolidada para que sea corregida y unificada en Colpensiones. Todo lo anterior para poder acceder a la pensión con base en las semanas debidamente corregidas. manifiesta la negligencia administrativa de Colpensiones y de Colfondos le está privado de acceder a le pensión de vejez en la forma en la que legal y constitucionalmente tiene derecho. Su actitud y actuaciones han sido nugatorias de sus derechos fundamentales y le han privado de la posibilidad de acceder al derecho a la pension.

2.2. PETICIÓN:

Solicita:

“Que Colpensiones responda de fondo la solicitud de corrección de mis semanas y de solicitud de pensión que he realizado.

Que Colfondos y Colfondos realicen y finalicen de forma inmediata todo y cualquier trámite administrativo faltante, alegado como excusa para no acceder a mis solicitudes, incluyendo, sin limitarse a, remitir toda la información de mi historia laboral, consolidarla y dar continuación al trámite de mi pensión.

Que Colpensiones, con base en mi historia laboral debidamente corregida, dé continuación al trámite de otorgamiento de mí pensión y me la otorgue puesto que todos los requisitos han sido cumplidos.

Que el Juzgado compulse copias de esta decisión a la Superintendencia Financiera con el fin de que se inicie el trámite disciplinario correspondiente en contra de Colfondos y Colpensiones.” (Archivo digital 03).

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 15 de febrero de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 08), en el que se ordenó, notificar a las partes, y solicitarle al accionado y a la vinculada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTA:

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS (archivo digital 13): Se opone a la prosperidad de la acción de tutela de la referencia, en atención a que Colfondos S.A. no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante.

Asegura que al validar el sistema interno y la plataforma SIAFP el accionante LUIS FERNANDO LEON SOTO identificado con C.C. 79231902, se encuentra con la vigencia válidamente anulada en Colfondos S.A. y trasladado a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES S.A. Que el 09 de septiembre de 2022, se procedió a efectuar y solicitar la anulación del traslado de régimen y posteriormente realizar el traslado de aportes, quedando como única afiliación del afiliado ante la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES S.A.

En atención al derecho de petición presentado por el accionante, mediante comunicado 220531- 000665, del 30 de septiembre de 2022, se procedió a informar cumplimiento de sentencia de proceso ordinario de la siguiente manera:

“

Afiliado : CC 76231002 LUIS FERNANDO LEON SOTO [Ver detalle](#)

Novedad:

Fecha inicial (aaaa/mm/dd):

Fecha final (aaaa/mm/dd):

Selección una novedad

10

20

Filtrar

Novedades para : CC 76231002					
Fecha de novedad	Fecha de proceso	Entidad solicitante	Tipo de novedad	Novedad respuesta	
2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 19:30:30	COLFONDOS	132-Pago de no vinculados	051-Transacción exitosa	Ver detalle
2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 19:30:30	COLFONDOS	132-Pago de no vinculados	051-Transacción exitosa	Ver detalle
2022-08-07 00:00:00	2022-08-07 19:47:27	COLFONDOS	132-Pago de no vinculados	051-Transacción exitosa	Ver detalle
2022-08-02 00:00:00	2022-08-02 00:03:02	COLFONDOS	336-Actualización de historia laboral a Colpensiones	138-Afiliado pagado y no solicitado - Sobrante	Ver detalle
2022-08-23 00:00:00	2022-08-23 22:16:12	COLFONDOS	004-Solicitud de cruce de aportes de no vinculados	006-Transacción exitosa, pagar aportes	Ver detalle
2022-08-10 00:00:00	2022-08-10 19:21:39	COLFONDOS	004-Solicitud de cruce de aportes de no vinculados	006-Transacción exitosa, pagar aportes	Ver detalle
2022-08-10 00:00:00	2022-08-10 19:21:39	COLFONDOS	004-Solicitud de cruce de aportes de no vinculados	006-Transacción exitosa, pagar aportes	Ver detalle
2022-07-22 00:00:00	2022-07-23 04:40:27	COLFONDOS	004-Solicitud de cruce de aportes de no vinculados	336-Diferencia en la información o estados de afiliación de Colpensiones y el SIAFP	Ver detalle
2022-07-12 00:00:00	2022-07-12 10:33:53	COLFONDOS	004-Solicitud de cruce de aportes de no vinculados	076-Afiliado excluido por edad del Sistema General de Pensiones - devolver aportes	Ver detalle
2022-07-07 00:00:00	2022-07-09 23:22:31	COLFONDOS	208-Solicitud de anulación de traslado de régimen	051-Transacción exitosa	Ver detalle Ver imagen 1

Cuarto. En atención al derecho de petición presentado por el accionante, mediante comunicado 220531-000665, del 30 de septiembre de 2022, se procedió a informar cumplimiento de sentencia de proceso ordinario de la siguiente manera:

Respetado(a) Señor(a):

Le confirmamos la finalización del proceso de anulación de vigencias ante el Sistema de Información de Afiliados a los Fondos de Pensiones – SIAFP, quedando válidamente asignado(a) en la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Por lo anterior detallamos el traslado realizado:

Entidad Destino:

Fecha de Traslado:

Valor del Traslado:

Archivo Plano Historia Laboral:

COLPENSIONES

10/06/2022

\$ 492.235.634

CFCPAAT20220610.r032

Teniendo en cuenta la anterior información damos por finalizado el proceso requerido, cualquier aclaración adicional con gusto será atendida.

ICBBA

“

Informa que el accionante no ha presentado solicitudes ante esta entidad, en consecuencia, no existen tramites pendiente por resolver con la misma aparte del cumplimiento de sentencia de proceso ordinario, la cual tiene otros mecanismos judiciales para solicitar su cumplimiento. De los hechos descritos por el accionante, en la tutela, no se evidencia vulneración a derecho fundamental para proceder a la tutela para pretender cumplimiento de una orden judicial de proceso ordinario laboral pudiendo acceder por medio del proceso ejecutivo.

Que Colfondos S.A, ha finalizado los trámites correspondientes para dar cabal cumplimiento a sentencia dentro de Proceso Ordinario, así las gestiones tendientes a reconocimiento ha lugar, deberá efectuarlas la entidad ante la cual el accionante se encuentra solicitando gestiones de reconocimiento pensional.

Solicita por último declarar Improcedente trámite constitucional en atención a que no se han demostrado acciones u omisiones derogatorias de derechos constitucionales, ni perjuicio irremediable, existiendo eficiencia y eficacia de las gestiones realizadas.

Negar trámite al ser la acción de tutela un mecanismo subsidiario el cual requiere existencia de vulneración a derechos fundamentales, de forma inminente. Así, es improcedente como acción, pretender que la acción de tutela garantice cumplimiento de proceso ordinario.

Declarar hecho superado, siendo claro que se respondió petición elevada por accionante, y se está realizando el traslado conforme a los parámetros a Colpensiones.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES (archivo digital 14): solicita se DENIEGUE la acción de tutela contra COLPENSIONES por cuanto consideran que las pretensiones son abiertamente IMPROCEDENTES, como quiera que la presente tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, así como tampoco se encuentra demostrado que Colpensiones haya vulnerado los derechos reclamados por el accionante y está actuando conforme a derecho ya que la respuesta dada al accionante verificados los sistemas de información que tiene Colpensiones, se puede observar que no se encuentra petición reciente presentada por la accionante ante esta entidad que se encuentre pendiente de respuesta, hecho que se confirma con el traslado de tutela y anexos donde se evidencia que la accionante no aporta siquiera prueba sumaria en la que se evidencie que en ejercicio

de la petición hubiese puesto en marcha la administración, de lo que se entiende un uso indebido de la acción constitucional por cuanto alega la vulneración a derechos fundamentales y esta entidad tiene conocimiento solo a partir de la notificación de la acción.

Indica en su respuesta los siguientes aspectos a considerar:

“

TRÁMITE INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO JUDICIAL

Sea del caso indicar, señor Juez, que esta administradora entiende que el acatamiento de los fallos dictados por los funcionarios judiciales es un imperativo indiscutible de un Estado Social y Democrático de Derecho, sin embargo, también es claro que buscar el cumplimiento de una orden judicial a través del mecanismo constitucional, deviene en una acción improcedente por la existencia de otros mecanismos, máxime cuando no se ha demostrado un perjuicio irremediable.

Así mismo, es necesario aclarar que en Colpensiones se notifican en promedio 6.851 sentencias condenatorias mensualmente, generadas dentro de procesos ordinarios o contenciosos administrativos, para cuyo cumplimiento deben surtirse varios trámites internos, en sujeción a las normas presupuestales, el principio de planeación y legalidad que cobija a las entidades públicas¹, las instrucciones impartidas por los entes de control, como la Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación, las auditorías de calidad y seguridad, además de los controles orientados a prevenir dentro del marco nacional de lucha contra la corrupción.

Los trámites que ejecuta Colpensiones previo al pago de la sentencia se agrupan en las siguientes etapas:



Veamos cada uno:

- *Radicación de la sentencia*

El ciudadano o el abogado que representa a Colpensiones radica el acta con las decisiones ejecutoriadas.

Para la radicación se cuenta con una lista de chequeo de los documentos obligatorios y opcionales de conformidad al tipo de solicitud (cumplimiento de sentencia con ejecutivo - cumplimiento de sentencia sin ejecutivo) y tipo de instancia (primera instancia - segunda instancia). En caso de que la documentación se encuentre incompleta se genera comunicación al abogado o al ciudadano, indicando la documentación recibida y la faltante.

- Alistamiento de la sentencia

Debido a que la providencia es dictada en un proceso oral, conforme lo dispuesto en la ley 1149 de 2007, se debe solicitar al despacho la entrega del CD contentivo de las decisiones en concreto, el cual una vez transcrito, permite liquidar y pagar la orden judicial.

- Validación de documentos

En esta actividad, se valida que la documentación jurídica, y aquella necesaria para el trámite de cumplimiento de la obligación de hacer (documentos del ciudadano) y pago de costas, si hubiere lugar a ellas, sea allegada de forma integral en el radicado de cumplimiento de sentencias y procede a la verificación de autenticidad de los fallos judiciales, para lo cual, se realiza un requerimiento al contratista encargado de verificar la legitimidad de la decisión y se valida la existencia o no de duplicidad de la sentencia con otras solicitudes de cumplimiento de sentencia. En esta etapa se identifican casos de corrupción y abuso del derecho., conforme se expondrá más adelante.

Una vez la entidad cuenta con los elementos necesarios, se procede a la emisión del acto administrativo, su notificación al ciudadano, y la inclusión en nómina de pensionados o el giro de los recursos liquidados a su favor.

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Como se indicó, las gestiones internas que realiza Colpensiones, previas al cumplimiento de una sentencia tales como, identificar al ciudadano beneficiario, validar la documentación jurídica, determinar la información necesaria para el reconocimiento de la prestación económica, verificar que no exista duplicidad de sentencias o pagos, emitir los actos administrativos a que haya lugar, realizar las apropiaciones presupuestales, la inclusión en nómina, entre otras, no solo están dirigidas al cumplimiento de la providencia judicial, adicionalmente en esta fase se identifican, actuaciones proferidas con el propósito de defraudar al sistema, **usurpar sus recursos o lograr un beneficio particular sin el cumplimiento de los requisitos legales**, como puede suceder en los traslados al régimen de prima media, pues no se debe olvidar que este es un fondo común, por lo que se pueden ver afectados a futuro otros posibles beneficiarios.

Frente al particular, en reciente comunicado de prensa la Fiscalía General de la Nación, señaló:

“Uno de los frentes en los que estamos concentrando nuestra labor es el sistema pensional. La pérdida de reservas actuariales –en parte por la corrupción– fue una de las razones de la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales y la creación de Colpensiones, en 2012. El reconocimiento de pensiones a personas sin derecho o por montos superiores a su derecho, o por inversiones fallidas consumió las pocas reservas existentes. Hoy las pensiones dependen casi completamente del presupuesto nacional. En 2018 se requirieron cerca de 17 billones de pesos para pagar más de 1 millón 300 mil pensiones y al menos un tercio de esta suma salió del presupuesto nacional.

1. Desde la Fiscalía General hemos puesto en marcha una estrategia que aborda las modalidades más críticas de corrupción en los riesgos que cubre el sistema (invalidez, vejez y muerte). Además de identificar los casos críticos, se han hecho asociaciones que nos han permitido detectar las estructuras criminales detrás

de cada tipología de corru Tramitadores y abogados dedicados a engañar pensionados y al Estado.

2. Jueces que abusan de su poder para dar órdenes ilegales y facilitar el robo de los recursos pensionales
3. Pensionados que corrompen para acceder a derechos que no tienen.
4. Funcionarios y trabajadores privados que delinquen desde sus cargos. (...)”²

Ante tal problemática, la etapa del pago o cumplimiento del fallo, es una de las faces en las que la entidad, realiza el análisis pertinente con el propósito de identificar fraudes u obtención de prestaciones económicas con fundamento en conductas delictivas o situaciones de abuso del derecho, las cuales, solo son detectables una vez proferidas las sentencias, en la medida que, en esta etapa se conoce la decisión definitiva adoptada por la autoridad judicial.

Es evidente, que las sentencias judiciales condenatorias proferidas bajo escenarios de corrupción, generan impacto en los recursos del Sistema General de Pensiones, por lo que resulta indiscutible que el dinero destinado para el cumplimiento de este fin, debe ser objeto de medidas de protección especial, dentro de las cuales se encuentre el tiempo necesario para realizar el cumplimiento de la sentencia, los trámites presupuestales y la validación para su asignación, todo con el fin de garantizar un mínimo y adecuado equilibrio financiero.

En este punto, es importante indicar que Colpensiones viene realizando acciones con el ánimo de reducir los tiempos de respuesta y garantizar los derechos de los afiliados, pensionados y vinculados a la entidad, para lo cual, ha implementado medidas tendientes al fortalecimiento de la capacidad operativa (poblamiento de planta de personal, procesos, infraestructura tecnológica y modelo de atención al usuario).

ORDENES COMPLEJAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN PROCESO ORDINARIO

De otra parte, tal como se ha venido manifestando en el presente escrito, es menester señor Juez, tener en cuenta que la orden del fallo ordinario es una de aquellas considerada “orden compleja”, pues para acatarse, Colpensiones debe desarrollar actuaciones administrativas que no le son imputables únicamente la entidad, sino que además se requiere de la intervención de fondo de pensiones PORVENIR y PROTECCIÓN por lo que hasta que esta no desarrolle las actividades a su cargo, no será posible acatar integralmente el fallo ordinario laboral, toda vez que inicialmente se debe realizar una gestión para que la afiliación de Colpensiones quede sincronizada en SIAFP lo cual depende de la AFP y del administrador de Sistema, posteriormente debe realizarse el traslado de los recursos que se encontraban en la AFP, para poder proceder a verificar la imputación y actualizar la historia laboral.

Respecto al tema, la Corte ha señalado que las ordenes complejas son “mandatos de hacer que generalmente requieren del transcurso de un lapso significativo de tiempo, y **dependen de procesos decisorios y acciones administrativas que pueden requerir el concurso de diferentes autoridades** y llegar a representar un gasto considerable de recursos, todo lo cual suele enmarcarse dentro de una determinada política pública.”³

La obligación de hacer se hace compleja en este caso, **porque su ejecución desborda las competencias de PAR TELECOM y pasa a involucrar a otras instituciones estatales,** empezando por el MINTIC, como segundo obligado directo, la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- y el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP–, como entidades de apoyo técnico, y solo indirectamente, a toda la institucionalidad pública que las

entidades involucradas en el seguimiento requirieron para que ayudaran en la ejecución de la medida (infra).

Lo anterior como se evidencia, es justamente la situación que ocurre en el presente caso, ya que para que COLPENSIONES pueda realizar las acciones su cargo, requiere de la intervención de un tercero.

Respecto a esto último, la Corte ha indicado que la intervención del Juez Constitucional se encuentra restringida, pues además de verificar si no existe otro medio, si a pesar de existir el mismo no es eficaz, si hay un posible perjuicio irremediable, también debe tener en cuenta situaciones particulares como cuando el asunto se encuentra inmerso en una orden compleja, veamos como lo señaló en la sentencia T-267 de 2018:

Cuando se trata de órdenes complejas -no estructurales-, el nivel de intervención debe ser mucho menor, para conjurar la situación que subyace a la vulneración de derechos. Aquí, es importante que el juez constitucional, en un ejercicio de autorestricción, tenga en cuenta que debe, entre otras cosas, ser ponderado al momento de concebir el remedio. Esto es, "la orden compleja debe ir dirigida a dinamizar la actuación de las autoridades competentes y a superar el bloqueo institucional que trae consigo la transgresión masiva y sistemática de derechos fundamentales" y, **en ningún caso, a definir de manera precisa lo que estas autoridades deben hacer, ni a suplantar las competencias constitucionales de las instituciones encargadas de diseñar, implementar y evaluar las acciones requeridas para resolver la situación**"⁴.

Así las cosas, el Juez Constitucional, deberá tener en cuenta todas las circunstancias anteriormente señaladas, para determinar en el caso concreto, que COLPENSIONES no ha vulnerado derechos fundamentales del accionante y en cambio se encuentra desarrollando todas las actuaciones necesarias para que la AFP PROTECCIÓN y PORVENIR adelante las gestiones a su cargo."

CARENCIA DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

Como consecuencia de lo anterior, debe precisarse, que las pretensiones de la acción de tutela no requieren ser objeto de protección, como quiera que la entidad ya atendió de fondo la solicitud presentada por el accionante y que dio lugar a la acción de tutela de la referencia, por lo que ha de considerarse que se configuró un hecho superado en razón a la expedición del oficio BZ2022_7725343-2823704 del 15 de septiembre de 2022 y oficio No. de Radicado, 2023_1383672 del 27 de enero de 2023.

Ahora bien, respecto a la finalidad de la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la Jurisprudencia Constitucional son claros en señalar que la protección y el amparo que se obtiene a través de la acción de tutela debe ser actual e inmediata e implica una acción u omisión actual por parte de la autoridad accionada, circunstancias que en este caso no se presentan pues se ha satisfecho el derecho fundamental cuya lesión fue invocada en el escrito de tutela, encontrándonos, entonces, frente a un hecho superado, al respecto la H. Corte Constitucional ha indicado en jurisprudencia¹ :

"Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción

IMPUTACIÓN DE PAGOS EN LA HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO La imputación de pagos en la historia laboral del afiliado, solo es procedente cuando se hace efectivo el pago de los aportes respectivos, en atención a que mediante estos recursos recaudados, se financiarán las prestaciones de quienes sean considerados como pensionados, frente a ello el artículo 32 literal b) de la Ley 100 de 1993 manifiesta:

“ARTÍCULO 32. CARACTERÍSTICAS. El Régimen de Prima Media con Prestación Definida tendrá las siguientes características:

(...)

b. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

Solicita que declare la carencia actual de objeto por existir hecho superado, de manera subsidiaria DENIEGUE la acción de tutela contra COLPENSIONES por cuanto las pretensiones son abiertamente IMPROCEDENTES, como quiera que la presente tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, así como tampoco se encuentra demostrado que Colpensiones haya vulnerado los derechos reclamados por el accionante y está actuando conforme a derecho.

Solicita que, de conformidad con las razones expuestas, negar la acción de tutela promovida por el accionante, en atención a que Colpensiones, se encuentra desarrollando las acciones a su cargo para acatar integralmente el fallo ordinario a través del cual se ordenó la nulidad del traslado, lo que implica realizar acciones conjuntas con la AFP, por lo cual los tiempos de atención deben ser razonables frente a las tareas a desarrollar por parte de cada entidad.

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A (archivo digital 10): señala que, no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, y se observa en el extracto del Sistema de Afiliados a los Fondos de Pensiones (SIAFP), la afiliación del señor LUIS FERNANDO LEON SOTO se encuentra en cabeza de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES; lo anterior, teniendo en cuenta el traslado al Régimen de Prima Media (RPM)

Argumenta que, verificado el sistema interactivo de Colpensiones, se observa certificado en el cual se arroja como resultado que verificada la base de datos de afiliados, el señor LUIS FERNANDO LEON SOTO identificado con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 79231902, se encuentra afiliada desde 17/07/1989 al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

En relación con las pretensiones del accionante relacionada con el reconocimiento de la pensión de vejez, la Sociedad Administradora carece de competencia administrativa y funcional para pronunciarse.

solicita NO tutelar los derechos pretendidos por el accionante contra PORVENIR S.A., ya que es claro que esta Sociedad Administradora no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, el señor **LUIS FERNANDO LEON SOTO**, acudió a la acción de tutela para que se protegiera el derecho fundamental de petición, el cual afirma está siendo conculcado como consecuencia de la falta de una respuesta por parte de la accionada. Por lo anterior, se encuentra legitimado en la causa por activa para

presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva:

Como quiera que la legitimación por pasiva atiende a la capacidad legal de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales “*resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública*” o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto sub-judice, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, entidad a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva del derecho fundamental invocado por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta a su petición.

- Inmediatez:

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que “*La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros*”.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte del accionante ante **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, el 19 de diciembre de 2022, (archivo digital 003), y en la que presentó la acción constitucional, 13 de febrero de 2023 (archivo digital 005), ha transcurrido poco más de veinte (20) días, por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad:

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: “*(...) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para reemplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente*”.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte del accionado a la petición que elevó el 03 de marzo de 2022 el 10 de junio de 2022 y el 24 de enero de 2023, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.2.1. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)*”. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;

(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable”.

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

“la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional “consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada”. Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, “pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”.

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: *“(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)”.*

Así mismo, la Ley 1755 de 2015 establece los términos para resolver las distintas modalidades de petición en su artículo 14, señalando que la regla general es que *“toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (...)”* y que se encuentran sometidas a un término especial las peticiones de documentos y de información que *“deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción”* y las peticiones mediante las cuales se elevan consultas a

las autoridades en relación con las materias a su cargo, las cuales “deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

V. CASO CONCRETO

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante LUIS FERNANDO LEON SOTO, en especial, a la seguridad social, y al debido proceso.

Al respecto, es preciso resaltar que la acción de tutela es un mecanismo de amparo judicial que permite a las personas exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando se presente una violación o amenaza de violación por actos, hechos, omisiones u operaciones de cualquier autoridad pública, o por la acción u omisión de particulares bajo ciertas y determinadas circunstancias que define la Ley.

Sobre el contenido material del derecho fundamental del debido proceso, conviene señalar que su sustento constitucional se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, como se pasa a citar a continuación:

*“Artículo 29. **El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.** Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; **a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas;** a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Negrilla y subrayado fuera del texto.*

En suma, el máximo tribunal constitucional en sentencia C-034 del 2014, estableció como garantía previa la duración razonable de los procesos en el ámbito administrativo, como se pasa a ver:

*“La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, **la razonabilidad de los plazos** y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa”. Negrilla y subrayado fuera del texto.*

Además, la Convención sobre Derechos Humanos establece en el numeral 1 del artículo 8, señala lo siguiente:

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Por otro lado, el derecho a la seguridad social está normado en el artículo 48 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente:

“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.

Igualmente, la H. Corte Constitucional en sentencia T-013 de 2020 estableció la diferencia entre adulto mayor y persona de la tercera edad, como se pasa a ver en la siguiente cita jurisprudencial.

*Conviene precisar que el término “persona de la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a menudo se usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros de vida. De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, **será adulto mayor quien supere los 60 años** o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier **persona de la tercera edad será un adulto mayor***

En la misma sentencia citada anteriormente, el máximo tribunal constitucional comentó lo siguiente:

El derecho a seguridad social tiene un carácter fundamental relacionado con el derecho al mínimo vital, más aún, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión y son sujetos de una especial protección constitucional.

Asimismo, el artículo 192 del C.P.A.C.A, señala lo siguiente:

*Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de **treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento**. (Se subraya para destacar).*

Visto el anterior panorama legal, jurisprudencial y convencional se procede a descender al caso objeto de estudio.

Para iniciar, delantadamente el suscrito Juez accederá al amparo rogado por el accionante, debido a su **protección constitucional reforzada** derivada de su condición de edad, en efecto, se avizora la procedencia excepcional por vulneración a los derechos fundamentales de la persona de la tercera edad.

En primer lugar, el accionante reclama el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 31 Laboral del Circuito de esta ciudad el 24 de julio de 2020, confirmada por el H. Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral el 30 de abril de 2021.

En tercer lugar, en los anexos del escrito introductorio se encuentra adosado la fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor LUIS FERNANDO LEON SOTO en donde se evidencia que nació el 16 de septiembre de 1960, es decir, que en la actualidad **tiene 62 años, en efecto, es una persona de la tercera edad.**

Alfaro: CC 7621962 LUIS FERNANDO LEÓN SOTO <i>36 años</i>						
Adults, events, conditions, elections						
Fecha de inscripción		Fecha de solicitud *	Fecha de ingreso	MTF destino	MTF origen	MTF destino antes de reasignación
Inscripción inicial		1800-05-18	2022-09-08	COLOMBONES		
Un item encontrado.						
1						
Vinculaciones migradas de Moreque para CC 7621962						
Fecha de solicitud	N	Fecha de ingreso	Condición de ingreso	MTF	MTF reasignación	

[illegible]

Respetado(a) Señor(a):

Le confirmamos la finalización del proceso de análisis de vigencia ante el Sistema de Información de Afiliados a los Fondos de Pensiones - SIAPP, quedando utilitariamente asignado(a) en la Administración Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Por lo anterior detallamos el traslado realizado:

Entidad Destino:	COLPENSIONES
Fecha de Traslado:	10/06/2022
Valor del Traslado:	\$ 482.235.634
Archivo Plano Historia Laboral:	CPCHAA21202610/032

Teniendo en cuenta la anterior información damos por finalizado el proceso requerido, cualquier aclaración adicional con gusto será atendida.

^a *Staphylococcus aureus* ATCC 29222.

Véase, que uno de los principios fundamentales del debido proceso es que se garantice los plazos razonables en las actuaciones administrativas y judiciales, en caso de no hacerse lesionaría dicha garantía fundamental, como en el presente asunto en donde han transcurrido más de 11 meses sin que **COLPENSIONES** de cumplimiento al fallo emitido por la jurisdicción laboral, situación que también atenta contra el derecho de la seguridad social del señor LUIS FERNANDO LEON SOTO, dado que no se le ha corregido su historial laboral.

Recuérdese, que se hace necesario que se efectúe la corrección de su historial laboral en aras a que el accionante pueda iniciar sus trámites de solicitud pensional.

Llegado a este punto, conviene aclarar que en ningún momento se condenó a **COLPENSIONES** a pagar alguna suma de dinero en favor del demandante, ni tampoco se está solicitando algún trámite concerniente a una persona fallecida, en efecto, la contestación emitida por dicha entidad se aleja a lo que realmente está solicitando el señor LEON, pues COLPENSIONES al contestar el último derecho de petición le indica al accionante que si bien es cierto COLFONDOS ya realizó el traslado correspondiente, le aclara que se hace necesario que dicha entidad envíe “un archivo con el detalle de los mismos”; sin embargo, COLPENSIONES no acreditó en esta acción constitucional que le haya solicitado a COLFONDOS dicha información según ellos faltante, como pasa a verse:



En este orden de ideas, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una persona de especial y reforzada protección constitucional debido a su condición de edad, se accederá de manera excepcional al amparo rogado en aras a superar la vulneración de sus garantías fundamentales.

Por consiguiente, se ordenará a **COLPENSIONES** que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente proveído proceda a dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 31 Laboral del Circuito y confirmada por el H. Tribunal Superior de Bogotá el día 30 de abril del año 2021.

Si para tal fin requiere de alguna aclaración o complementación por parte de la AFP COLFONDOS, deberá en un término máximo de dos (2) días solicitar la información y COLFONDOS deberá contestar en un término máximo de dos (2) días para que, COLPENSIONES dentro del término otorgado en esta acción constitucional (15 días) proceda a dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 31 Laboral del Circuito y confirmada por el H. Tribunal Superior de Bogotá el día 30 de abril del año 2021.

Finalmente, se ordenará que este proveído se notifique por el medio más expedito a las partes intervinientes.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano LUIS FERNANDO LEON SOTO de acuerdo con lo considerado en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente proveído proceda a dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 31 Laboral del Circuito y confirmada por el H. Tribunal Superior de Bogotá el día 30 de abril del año 2021.

Si para tal fin requiere de alguna aclaración o complementación por parte de la **AFP COLFONDOS**, deberá en un término máximo de dos (2) días solicitar la información y se **ORDENA que COLFONDOS** conteste en un término máximo de dos (2) días para que, COLPENSIONES dentro del término otorgado en esta acción constitucional (15 días) proceda a dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 31 Laboral del Circuito y confirmada por el H. Tribunal Superior de Bogotá el día 30 de abril del año 2021.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes intervinientes por el medio más expedito.

CUARTO: REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia dentro del término

CÚMPLASE



CÉSAR ENRIQUE OSORIO ORTÍZ
JUEZ

AP